



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)**

Demandante: NORA PATRICIA HEREDIA ZAPATA  
Demandado: AFP PROTECCIÓN S.A.  
Litisconsorte: GLORIA ELENA QUIRÓS DE SÁNCHEZ  
Radicado: 05001 31 05 015 2021 00568 01  
Sentencia: S-284

## **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver **el recurso de apelación interpuesto por la AFP PROTECCIÓN S.A.**, contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín el día 16 de febrero de 2023.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

## **PRETENSIONES**

NORA PATRICIA HEREDIA ZAPATA demandó a la AFP PROTECCIÓN S.A., para que sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión

de invalidez a partir del 12 de diciembre de 2015, junto con los intereses moratorios o en subsidio la indexación y las costas procesales.

### LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus pretensiones, que se encuentra afiliada al Régimen de ahorro individual a través de la AFP PROTECCIÓN S.A.; que el 10 de octubre de 2015, sufrió un derrame cerebral que le afectó el *hemicuerpo izquierdo*, con *monoparesia derecha*, presentando *afasia*, *disartria* y *monoparesia del miembro superior derecho*. Indica que solicitó la calificación de la PCL a PROTECCIÓN S.A., la cual le otorgó un porcentaje del 69.34% con fecha de estructuración del **17 de enero de 2017** de origen común; que presentó inconformidad por la fecha de estructuración, la cual fue modificada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, definiendo como tal el **12 de diciembre de 2015**, sin presentarse recurso adicional alguno.

Manifiesta que radicó solicitud para el reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual le fue negada argumentando que no cumplía con las 50 semanas en los 3 años anteriores a la invalidez, tomando como fecha de estructuración el 17 de enero de 2017, fecha errónea por no tener en cuenta el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, pues deben tomarse las semanas entre el 12 de diciembre de 2012 y el mismo día y mes de 2015.

### CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, **PROTECCIÓN S.A.** acepta la afiliación de la demandante; no le constan las enfermedades que padece, tampoco las razones de su calificación, pero admite como cierto que esta administradora a través de la Comisión Médico Laboral de la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A. le otorgó una PCL del 69.34% con fecha de estructuración del 17 de enero de 2017, dictamen realizado el 9 de agosto de 2017 y notificado a la actora el 25 del mismo mes y año.

Admite que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia le determinó como fecha de estructuración el 12 de diciembre de 2015; también que la demandante elevó solicitud pensional; reconoce que se equivocó en la fecha de estructuración plasmada en su estudio pensional, más no en la afirmación que no cumplía las 50 semanas en los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez, pues solo tiene acreditadas 30.71 semanas. Expresa que sí tuvo en cuenta el dictamen de la Junta Regional, pero aun así no cumple el requisito de semanas, por cuanto la relación laboral registrada con el empleador QUIRÓS DE SÁNCHEZ GLORIA ELENA, fue reportada ante PROTECCIÓN S.A. el 3 de noviembre de 2017 a las 11:14:46, y el pago de los aportes de dicha relación laboral, es decir, entre el 18 de julio de 2013 y el 30 de diciembre de 2013, fue realizado el 22 de noviembre de 2017, esto es, los pagos se realizaron 4 años después de la existencia de la misma, un año después de iniciado el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral, tres meses después de notificado el dictamen de la Comisión Médico Laboral de la Compañía Suramericana a la demandante y dos meses después de interpuesto el recurso de apelación por la demandante, en el cual solicitó cambiar la fecha de estructuración para el año 2015.

Indica que la relación laboral y los aporte que se realizaron de manera extemporánea, no pueden ser tenidos en cuenta para el cómputo de semanas, pues durante este tiempo no hubo cobertura de los seguros previsionales. Afirma que el período comprendido entre 18 de enero de 2013 al 30 de diciembre de 2013 no se puede contabilizar para efectos de determinar las semanas necesarias para adquirir el derecho a una pensión de invalidez a favor de la demandante, por cuanto dicha relación laboral y tales aportes fueron pagados de manera extemporánea. Aclara que, si bien en la actualidad estos aportes se encuentran en PROTECCIÓN S.A., no fue mediante un acto de voluntad, sino que la empleadora de la demandante reportó y pagó los mismos a través de un operador, el cual le permitió realizar el pago de dichos periodos, caso contrario, donde el empleador hubiera pagado

directamente a la Administradora, no se habrían recibido los aportes ya que eran cancelados con posterioridad al inicio del trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral de la demandante.

Se opuso a las pretensiones. Como excepción previa planteó no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, esto es, la señora QUIRÓS DE SÁNCHEZ GLORIA ELENA, y como de mérito inexistencia de la obligación, improcedencia de la prestación solicitada, exequibilidad del requisito de 50 semanas, inexistencia de relación laboral por el periodo comprendido entre el 18 de enero al 30 de diciembre de 2013, deber del empleador de reportar la relación laboral y de efectuar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de forma efectiva, el pago de la pensión de invalidez de la demandante es responsabilidad exclusiva de los empleadores, no cobertura del Seguro Previsional para la Financiación de la pensión de invalidez, buena fe, prescripción, pago y compensación.

La señora **GLORIA ELENA QUIRÓS DE SÁNCHEZ**, quien fuera integrada al proceso como litisconsorte necesario por pasiva, contestó la demanda admitiendo que la actora está afiliada a PROTECCIÓN S.A., la enfermedad sufrida y la calificación efectuada tanto por PROTECCIÓN S.A. como por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia. Que no le consta la fecha en que radicó la solicitud pensional, pero es cierto que le fue negada la pensión de invalidez. Manifiesta que la demandante fue empleada doméstica de la familia ARANGO DE QUIROS, y estuvo al cuidado de su señora madre LUCIA ARANGO DE QUIROS hasta su fallecimiento el día 17 de julio 2013; que con su muerte se presentó una inconsistencia en la continuidad de los aportes, pues si bien la demandante siguió laborando de manera continua con la familia, por error involuntario no se continuó con la obligación de los aportes, los cuales fueron cancelados de manera extemporánea haciéndose el pago en las instalaciones de PROTECCION S.A., el día el 22 de noviembre del 2017, con las sanciones y las moras que PROTECCIÓN S.A en su momento manifestó, sin objeción alguna al

pago. Por tanto, no es cierto que las mismas se hayan hecho por algún otro sistema de recaudo, por pila o por un operador diferente a PROTECCIÓN S.A.; que en ningún momento dichos aportes se hicieron de mala fe o a espaldas del fondo PROTECCIÓN S.A.; que dichos aportes deben ser tenidos en cuenta para el cómputo de las semanas, ya que no se pueden desconocer derechos fundamentales de la demandante, como tampoco pronunciamientos constitucionales como la Sentencia SU226 del 2019, pues el pago se surtió conforme al cálculo actuarial que ellos mismos efectuaron.

Se opuso a las pretensiones de la demanda, toda vez que van dirigidas en contra de PROTECCIÓN S.A., ratificándose en los argumentos frente al pago de los aportes. Y como excepciones propuso la de falta de causa para pedir, existencia de buena fe de la vinculada, prescripción y compensación.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia del 16 de febrero de 2023, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, decidió:

**“PRIMERO: DECLARAR** que el Dictamen No. 069661 del 24 de enero de 2018, emitido por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, se torna valido por ser el último y definitivo para establecer la pérdida de capacidad laboral de la demandante señora NORA PATRICIA HEREDIA ZAPATA identificada con cédula de ciudadanía N° 43.755.909, en un porcentaje del 69.34% estructurada el 12 de diciembre de 2015, de origen común.

**SEGUNDO: DECLARAR** que la afiliada NORA PATRICIA HEREDIA ZAPATA, cumple con los requisitos de Ley para acceder a la pensión de invalidez de origen común.

**TERCERO: CONDENAR** a **PROTECCIÓN S.A.**, representada legalmente por el doctor JUAN DAVID CORREA SOLORZANO, o por quien haga sus veces, a reconocer a la señora **NORA PATRICIA HEREDIA ZAPATA**, los siguientes conceptos:

-La suma de por concepto de retroactivo pensional la suma de **SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L (\$76.265.243)**, causados desde el **12 de diciembre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2023** (sic).

A continuar pagando a la demandante, a partir del **1 de febrero de 2023** una mesada pensional por valor de **(\$1.160.000)**, sin perjuicio de los incrementos anuales para los años siguientes, y teniendo en cuenta la mesada adicional de diciembre para cada una de las anualidades.

-A pagar los intereses moratorios generados sobre cada una de las mesadas pensionales causadas, a partir del **9 de diciembre de 2016** y hasta cuando se haga efectivo el pago.

**CUARTO:** Se autoriza a **PROTECCIÓN S.A.** para que del retroactivo generado por la demandante se le descuenta los aportes en salud y los mismos se giren a la EPS que se encuentra afiliada.

**QUINTO: ABSOLVER** a la **LITISCONSORTE NECESARIO POR PASIVA** señora **GLORIA ELENA QUIROZ DE SANCHEZ**, identificada con la cedula de ciudadanía 42.962.094 de todas las pretensiones incoadas por la demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.

**SEXTO:** Las excepciones propuestas por la parte demandada, en los respectivos escritos de las contestaciones, han quedado resueltas implícitamente con lo manifestado en la parte motiva, excepto la de prescripción formulada por **PROTECCIÓN S.A.** que se hizo un pronunciamiento expreso.

**SÉPTIMO:** Las costas serán asumidas por **PROTECCIÓN S.A.** vencida en juicio. Para lo cual se fijan las agencias en derecho en la suma de **\$4'000.000.00** y un salario mínimo de 2023 **(\$1.160.000.00)** a favor de la integrada como litisconsorte necesario por pasiva."

La juez de primera instancia motivó su decisión señalando, en síntesis, que debe tomarse el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, y que, conforme a ello, cumple los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, ya que de acuerdo con la historia laboral cotizó en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración, esto es, entre el

12 de mayo de 2015 (sic) al 12 de diciembre de 2015, un total de 54.14 semanas. En relación a la litisconsorte necesaria, señora GLORIA ELENA QUIRÓS DE SÁNCHEZ, manifiesta que verificada la historia laboral aportada por PROTECCIÓN S.A. no se evidencia ninguna cotización en mora, por lo que no se encuentran razones para hacer un pronunciamiento en su contra, más aún cuando la ley permite y da herramientas a las AFP para que cobre los aportes en mora, sin que salga afectado el afiliado, que es la parte débil de la relación tripartita.

### **DEL RECURSO DE APELACIÓN**

Interpuesto por la apoderada de PROTECCIÓN S.A. indica que no es procedente la condena en su contra al pago de la pensión de invalidez, dado que no se cumplen los requisitos para ello en tanto la demandante no acredita 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la estructuración de la PCL, de acuerdo al artículo 39 de la ley 100 de 1993, normatividad aplicable al momento de la invalidez, ya que solo acreditó 30,61 semanas en tal periodo. Que no es posible tener en cuenta las semanas pagadas extemporáneamente por la empleadora, y para el cómputo no pueden tenerse en cuenta las correspondientes del 13 de julio de 2013 al 30 de diciembre de 2013, ya que la demandante no generó el derecho a la pensión porque supuestamente el empleador no cumplió con su obligación de realizar los aportes debidos, y nunca reportó la existencia de la relación laboral.

Aduce que en este caso no se trata de una omisión de aportes, sino de una omisión de reportar su vinculación laboral, pues no se informó al respecto por el lapso del 13 de julio de 2013 al 30 de diciembre de 2013, por lo que PROTECCIÓN S.A. estaba imposibilitada para adelantar las acciones de cobro, no era posible hacer los cobros coactivos que la jurisprudencia ha mencionado que deben efectuar las administradoras, pues existió omisión de la afiliación que es distinto a la omisión de aportes.

Resalta que, tal y como quedó demostrado en el proceso, la relación laboral entre el 18 de julio de 2013 al 30 de diciembre de 2013 solo se reportó ante PROTECCIÓN S.A. el 3 de noviembre de 2017, y también está demostrado que los aportes por ese lapso fueron pagados en forma extemporánea, es decir, el 22 de noviembre de 2017 acreditado con prueba documental en los anexos 4 y 6 del expediente, y también demostrado con la contestación de la demanda de la misma señora GLORIA ELENA QUIRÓS DE SÁNCHEZ, la cual manifiesta que omitió la afiliación y la realización de los aportes, y que los hizo de forma extemporánea, aportando un comprobante de pago que muestra los pagos realizados el 22 de diciembre de 2017.

Indica que para la fecha en que se reportó la relación laboral y los pagos, ya no era posible hacerlos, teniendo en cuenta que la entidad actuó de buena fe, y por eso realiza los cálculos actuariales solicitados y no se percató de las mala intención que tenían las partes, pues para la fecha que solicitan el pago y el reporte de relación laboral, ya hacía más de un año que la demandante había iniciado el proceso de calificación de PCL y ya se había notificado el dictamen por parte de SURA e, incluso, ya se había presentado recurso contra este dictamen solicitando modificar la fecha de estructuración para el año 2015, por lo que la intención de la demandante y supuesta empleadora era que sí tuviera las 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración, pues resulta extraño que en la comunicación de la pérdida de capacidad quien recibe la información para que la demandante se notifique de la PCL, fue la señora GLORIA ELENA QUIRÓS DE SÁNCHEZ, amiga de la demandante, por lo que ésta sabía del proceso de la pérdida de capacidad laboral y el recurso interpuesto, lo cual evidencia la mala fe de las partes en el proceso al querer defraudar al sistema pensional para que la demandante tuviera derecho a esta prestación económica.

Que debe tenerse en cuenta el numeral 4 del artículo 53 del decreto 1406 de 1999, que consagra la imputación de pago: "*Cuando el período*



*declarado corresponda a obligaciones en mora para el riesgo de pensiones, podrá efectuarse el pago correspondiente a dichas obligaciones, siempre y cuando no hubiere tenido lugar el siniestro que daría lugar al pago de prestaciones de invalidez o sobrevivencia"; de esta norma se desprende que el no pago por parte del empleador que incida en el cómputo de las semanas, el afiliado tendrá derecho a la pensión de invalidez por parte del empleador moroso, resaltando lo consagrado en los artículos 193 y 259 CST, y como el empleador no cumplió con la carga de afiliar y pagar los aportes de la demandante, la administradora no puede subrogarse en la obligación que se demanda, por lo que la empleadora es quien debe pagar dicha prestación económica.*

Destaca el artículo 20 de la ley 100 de 1993, según el cual, del aporte que hace el afiliado mes a mes, el 3% se destina para los gastos de administración y para las primas de seguros de invalidez y sobrevivencia, así mismo, el artículo 70 ib. explica cómo se financia una pensión de invalidez en el RAIS, la cual es con la cuenta de ahorro individual del afiliado más el bono pensional si hay lugar a este y la suma adicional que se necesita para completar el capital que financie el monto de la pensión y la suma adicional estará a cargo de la aseguradora con la que se haya contratado el seguro de invalidez y sobrevivencia, y en este caso, al haber omisión por parte del empleador de realizar la afiliación y pago de aportes por esos períodos, no se pagó el seguro previsional por lo que no hay cobertura para el pago de la prestación a favor de la demandante, siendo la empleadora quien debe pagar la prestación si se considera que tiene derecho a la misma.

Por lo anterior, solicita revocar la condena del pago de la pensión de invalidez y el retroactivo pensional a la demandante, junto con la condena por intereses moratorios, pues esta sanción sólo procede en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales y lo que se debate en el caso concreto es un derecho que no había nacido a la vida jurídica, justificando esta solicitud bajo la sentencia SL 787 de 2013 CSJ en la que resalta que cuando las administradoras de pensiones niegan el

reconocimiento de la prestación económica amparada en la normatividad, deben ser excluidas del pago de intereses moratorios.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Al recorrer el traslado para alegar, la apoderada de PROTECCIÓN S.A. solicita se revoque la sentencia de primera instancia reiterando los argumentos de su apelación.

A su turno, el apoderado de la DEMANDANTE sostiene que se le debe reconocer la pensión de invalidez, toda vez que PROTECCIÓN S.A. tuvo una interpretación errónea respecto a la contabilización de las semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez determinada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia.

Por último, la señora GLORIA ELENA QUIRÓS DE SÁNCHEZ, manifestó que actuó bajo el principio de buena fe, pues todas las actuaciones se encuentran probadas y soportadas, al contrario de lo que manifiesta la AFP; que el pago se hizo en las oficinas de PROTECCIÓN S.A. y en ningún instante se le hizo observación alguna sobre el hecho de que para el momento había un proceso de calificación en curso; indica que los tiempos de servicio de los trabajadores respecto de quienes han existido omisiones que no le son oponibles, deben ser incluidos dentro del cómputo de las semanas de cotización necesarias para acceder a la pensión de invalidez, y asumir lo contrario, resultaría constitucionalmente errado. Y que no le asiste razón al fondo de pensión en cuanto manifiesta que la relación laboral y los aportes que se realizaron no pueden ser tenidos en cuenta para el cómputo de las semanas, desconociendo derechos fundamentales de la demandante como lo es el reconocimiento de su pensión, pues como quedó demostrado, el pago se surtió conforme al cálculo actuarial que el mismo fondo manifestó, como se puede comprobar del formulario de autoliquidación de aportes.

### CONSIDERACIONES:

Atendiendo al sentido de la apelación presentada por PROTECCIÓN S.A., se abordará el estudio de los siguientes temas y en el orden que se propone: **1)** si existió o no, **mora** en las cotizaciones correspondientes a la demandante por parte de su última empleadora, la Sra. GLORIA ELENA QUIRÓS DE SÁNCHEZ, o si lo que se presentó fue una situación de **omisión** en la afiliación. Y con respecto a ello, se decidirá a quién le compete la responsabilidad en el reconocimiento de la pensión de invalidez; **2)** si la demandante reúne los requisitos para ser beneficiaria de la prestación solicitada, así como el reconocimiento del retroactivo pensional; y **3)** la procedencia de los intereses moratorios o en subsidio la indexación.

Previamente, conviene hacer un recuento de los temas que NO son objeto de controversia, porque así se infieren del conjunto probatorio:

- i. La demandante NORA PATRICIA HEREDIA ZAPATA fue afiliada al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de la AFP PROTECCIÓN S.A., el 2 de febrero de 2004, por parte de su empleador en ese entonces, la sociedad BORDA ESTAMPA S.A.<sup>1</sup>
  - a) Cotizó allí hasta el 24 de agosto de 2004.
  - b) Luego cotizó con la sociedad IDEAS FACTORY S.A. entre el mes de febrero de 2005 y el 15 de diciembre de 2005.
  - c) Posteriormente cotizó con la señora LUCÍA ARANGO DE QUIROS entre el 9 de septiembre de 2011 y el 17 de julio de 2013, fecha ésta en que su empleadora falleció.

---

<sup>1</sup> Folio 85 de la contestación de PROTECCIÓN S.A.

d) Con la Sra. GLORIA ELENA QUIROS DE SÁNCHEZ – hija de la anterior - cotizó desde el 18 de julio de 2013 hasta el 30 de diciembre de 2013, pero, en este caso, los aportes respectivos fueron pagados extemporáneamente, el día 22 de noviembre de 2017 por valor de \$1'132.372.<sup>2</sup>

- ii. El **18 de agosto de 2016**<sup>3</sup>, la actora radicó ante PROTECCIÓN S.A. solicitud de invalidez, por tal razón, la entidad le comunicó que daba inicio al trámite de la calificación de la pérdida de capacidad laboral y/o pago del subsidio por incapacidad temporal.
- iii. Por medio del dictamen N° 164328 del 9 de agosto de 2017<sup>4</sup>, la Compañía SURAMERICANA de Seguros de Vida S.A., por remisión de la AFP PROTECCIÓN S.A., calificó a la demandante con una pérdida de capacidad laboral del 69.34% estructurada el **17 de enero de 2017**. Decisión notificada el 25 de agosto de 2017.<sup>5</sup>
- iv. La demandante HEREDIA ZAPATA interpuso recurso de apelación<sup>6</sup> contra el dictamen anterior; resuelto por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA a través del dictamen N° 69661-2017 del 24 de enero de 2018<sup>7</sup>, mediante el cual concluyó que la fecha de estructuración era el **12 de diciembre de 2015**. Y,
- v. PROTECCIÓN S.A se acogió a esta última fecha de estructuración de la invalidez, pero sostuvo que, en cualquiera de los dos casos, la demandante no acredita el requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores al estado de invalidez, pues solo contaba con 30.71 semanas

---

<sup>2</sup> Folio 12 de la contestación de la litisconsorte

<sup>3</sup> Folios 88 y 89 de la contestación de PROTECCIÓN S.A.

<sup>4</sup> Folios 91 a 94 de la contestación de PROTECCIÓN S.A.

<sup>5</sup> Folio 96 de la contestación de PROTECCIÓN S.A.

<sup>6</sup> Folios 97 de la contestación de PROTECCIÓN S.A.

<sup>7</sup> Folios 98 a 101 de la contestación de PROTECCIÓN

durante ese periodo, por lo cual no sería esa Administradora la llamada a responder por la prestación de invalidez.

Ahora bien; la litisconsorte por pasiva, Sra. GLORIA ELENA QUIROS DE SÁNCHEZ, al replicar el hecho 8º de la demanda afirmó lo siguiente a través de su vocero judicial:

*“Lo primero que tenemos que resaltar es que la señora NORA PATRICIA HEREDIA ZAPATA, fue empleada doméstica de la familia ARANGO DE QUIROS, quien estuvo al cuidado de nuestra señora madre LUCIA ARANGO DE QUIROS hasta que falleció el día 17 de julio 2013.*

*Con la muerte de nuestra señora madre se presentó una inconsistencia en la continuidad de los aportes, pues si bien NORA PATRICIA HEREDIA ZAPATA siguió laborando de manera continua con nosotros, por error involuntario no se continuó con la obligación de los aportes.”*

Ocurrió, conforme a la historia laboral, que con el fallecimiento de la Sra. LUCÍA ARANGO DE QUIROS cesaron las cotizaciones al sistema en favor de la demandante, en tanto ésta solo vino a ser nuevamente afiliada – reingresada – por la Sra. GLORIA ELENA QUIROS DE SÁNCHEZ el día 3 de noviembre de 2017, y sus aportes pagados, como se acaba de señalar, el 22 de noviembre de ese año, cubriendo el periodo transcurrido entre el 18 de julio de 2013 y el 30 de diciembre de 2103, con lo cual aquella lograría acreditar 54 semanas cotizadas en los últimos tres años anteriores a la estructuración de la invalidez.

Tiene claro la Sala, bajo el anterior panorama, que no es la afiliada quien deba soportar las carencias u omisiones de las partes convocadas a juicio, para efectos del derecho pensional que le asiste. La cuestión que debe dilucidar la Sala es, entonces, bajo el anterior contexto, ¿a quién le corresponde asumir el riesgo? Para resolver este interrogante, en primer lugar, se parte del supuesto de que la afiliación es una sola,

y no se pierde por el hecho de que el trabajador deje de cotizar al sistema por cualquier tiempo, pues bien puede darse una reinscripción en cualquier momento. En segundo lugar, es diferente la situación que se presenta cuando el empleador omite la afiliación o la reinscripción de un trabajador al sistema, que cuando simplemente incurre mora en el pago de las cotizaciones. En principio, cuando ocurre aquello, es el empleador quien responde por las prestaciones del sistema de seguridad social; o cuando lo que se da es esto último, la responsabilidad recae en la entidad Administradora del Fondo de Pensiones.

La situación anterior, fue explicada en estos términos por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, desde la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2009, rad. 35211:

*“A juicio de la Corte, en la hipótesis de los afiliados en su calidad de trabajadores dependientes o subordinados, que han honrado su compromiso con el sistema de seguridad social de prestar el servicio y así causar la cotización, aquéllos o sus beneficiarios no pueden resultar perjudicados **por la mora del empleador en el cubrimiento de los aportes**, de modo que las consecuencias de esa omisión no se trasladan automáticamente al empleador, puesto que ha de verificarse si la administradora utilizó las herramientas legales de cobro, como que de no haberlo hecho, deviene a cargo de la entidad gestora el pago de los beneficios o de las prestaciones. (Destaca esta Sala)*

*De manera que una vez causada la cotización –en razón de que el afiliado prestó el servicio–, surge a favor de la entidad administradora un crédito por el valor de aquélla y de los intereses moratorios por la tardanza en su pago.*

*Prevalida de ese crédito, la administradora está legitimada para iniciar los trámites orientados al recaudo efectivo de la cotización,*

so pena de correr con la obligación de reconocer o pagar la prestación, en caso de renuencia.

En suma, la omisión por parte de la administradora de adelantar las gestiones encaminadas a conseguir la percepción de las cotizaciones, apareja la consecuencia jurídica de que sea la administradora de pensiones y no el empleador quien asuma el reconocimiento y satisfacción de la prestación al afiliado o a sus beneficiarios.

Repárese en que esta nueva construcción jurisprudencial viene edificada sobre unos cimientos inconfundibles: la omisión del empleador de su obligación de pagar los aportes, sin que las administradoras del régimen de pensiones hubiesen echado mano de los instrumentos legales enderezados a obtener la percepción efectiva de las cotizaciones.

**Tal orientación doctrinaria, en manera alguna, se soporta en el incumplimiento de la obligación del empleador de afiliar por primera vez a sus trabajadores o de inscribirlos nuevamente cuando ya existe la afiliación. En consecuencia, la falta de afiliación o de inscripción, según sea el caso, hace responsable, única y exclusivamente, al primero frente a las contingencias sociales que provocan necesidades sociales a los segundos.** (Negritas propias)

Y ello deviene obvio, natural y lógico. Porque sin afiliación o inscripción no existe la posibilidad jurídica de cobrar la cotización, de modo que no es posible jurídicamente trasladar la responsabilidad de atender las necesidades sociales de los trabajadores al sistema de seguridad social, desde luego que las entidades administradoras o gestoras carecerían de título legal para promover trámite alguno contra los empleadores, como que no media la afiliación o inscripción de sus empleados.

**De verdad que sería un imposible jurídico pretender cobrar cotizaciones de alguien que no pertenece al sistema de seguridad social, por no existir afiliación o por no haberse dado su inscripción al reingresar a la fuerza de trabajo.** Las acciones judiciales de cobro se predicen de las administradoras respecto de sus afiliados que no cubren los aportes.

En síntesis, en un sistema de seguridad social en pensiones eminentemente contributivo, como el implementado y desarrollado en nuestro país, la omisión de la obligación de afiliación o de inscripción comporta que el empleador sea el único obligado a atender las necesidades de sus trabajadores.

Ninguna consecuencia jurídica se cierne sobre las administradoras o gestoras, toda vez que, al no mediar la afiliación o inscripción, no surge la cotización, ni, por tanto, se abren paso las acciones de cobro que contemplan las normas legales para ver de recaudar las cotizaciones que adeudan sus afiliados, se repite.

Por esa razón, si bien la falta de afiliación al sistema y la mora en el pago de las cotizaciones son situaciones diferentes, que es lo que en esencia sostiene la censura, ello trae como consecuencia que, en asuntos como el presente, no dan origen a las mismas consecuencias jurídicas, de cara al surgimiento del derecho de afiliados o beneficiarios al reconocimiento de las prestaciones propias del sistema y, de igual modo, respecto de la responsabilidad que surge a cargo del empleador incumplido"

Aplicando lo visto al presente caso, el deber ser de las cosas apunta a considerar que cuando la demandante dejó de laborar al cuidado de la Sra. LUCÍA ARANGO DE QUIROS por causa de muerte, y al producirse la continuidad del servicio con la familia QUIROZ ARANGO, según lo confiesa la litisconsorte GLORIA ELENA QUIROS DE SÁNCHEZ al contestar el hecho octavo de la demanda, ésta debió reportar la



novedad de retiro de su madre como empleadora, registrar la reinscripción de la trabajadora y continuar pagando las cotizaciones de manera oportuna, de tal suerte que se habría generado la subrogación del riesgo en cabeza del Fondo de Pensiones, que habría sido el escenario natural para la asunción del riesgo; más, como sea que el pago de las cotizaciones se efectuó después de producida la invalidez, vale decir, luego de generado el riesgo, tales aportes no serían oponibles a la entidad administradora, sino que, en aplicación de la tesis jurisprudencial, sería la última empleadora la responsable de asumir el pago de la contingencia.

En este punto concreto, cabe señalar que, aunque el 17 de julio de 2013 cesaron abruptamente las cotizaciones que desde el 9 de septiembre de 2011 venía realizando, de manera puntual y cumplida, la Sra. LUCÍA ARANGO DE QUIROS, lo que pudo llamar la atención de PROTECCION para requerir por la causa de la mora, lo cierto es que la confesión por apoderado judicial que se hizo en la respuesta al ya citado hecho 8º de la demanda, solo tiene efectos frente a la persona que se representa, más no frente a terceros como sería en este caso el Fondo de Pensiones accionado.

En esta línea, el Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en su artículo 2.12.1.1, ha definido la figura de la **omisión en la afiliación** como *“... el incumplimiento de la obligación de afiliar o afiliarse a alguno o algunos de los subsistemas que integran el Sistema de la Protección Social y como consecuencia de ello, no haber declarado ni pagado las respectivas contribuciones parafiscales, cuando surja la obligación conforme con las disposiciones legales vigentes”*.

Ahora bien, no se desconoce que, por ejemplo, en la sentencia SL4021-2019, aquella misma Corporación explicó las diferencias entre las figuras de la **mora en la cotización** y la **omisión en la afiliación**, pero indicando en ese caso que, pese a no existir afiliación, hay la

posibilidad de que la entidad administradora asuma el riesgo siempre y cuando se traslade el cálculo actuarial de los tiempos laborados; puntualmente expresó:

*“En el caso de la **no afiliación**, la Corte sostiene que esta circunstancia **no puede equipararse a la mora, pues no resulta comparable la situación del empleador que afilia a sus trabajadores e incumple el pago de algunos periodos con quien no comunica su ingreso al sistema**, ya que el empleador debe asumir el pago de las prestaciones que le hubieran correspondido a las administradoras en caso de afiliación. Este último aspecto ha sido morigerado y actualmente, entre otras razones, con motivo de la entrada en vigencia del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, reglamentado por el Decreto 3798 de ese mismo año, se admite la inclusión de estos tiempos pese a no existir afiliación, **siempre que se traslade el cálculo actuarial que los represente, en cuyo caso el sistema debe asumir el pago de la prestación** y, además, se reúnan los requisitos mínimos exigidos para la correspondiente prestación.” (Negrilla de la Sala)*

Conforme a lo anterior, vale señalar que la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, ha venido replicando que al existir una omisión en la afiliación se pueden validar las cotizaciones a través de un cálculo actuarial, y que son de recibo dichas semanas para la configuración del derecho, sin embargo, a través de su jurisprudencia dio un tratamiento diferenciador en los casos en que el riesgo se remite, precisamente, a la pensión de invalidez (o bien a las pensiones de sobrevivientes), como lo dijo en las sentencias SL1740-2021, SL5632-2021 y SL2949-2022, expresando en la primera de éstas, que “... ante la omisión de afiliación de un trabajador, como el presente caso, el responsable directo de las prestaciones que se deriven por la condición de invalidez es el empleador.”

De igual forma, en la SL5632-2021, señaló expresamente, lo siguiente:

“... se impone recordar que ante la omisión en la afiliación del trabajador al Sistema General de Pensiones, es deber de las entidades de seguridad social tener en cuenta el tiempo servido como efectivamente cotizado, y la obligación del empleador de pagar un cálculo actuarial, por los tiempos omitidos (CSJ SL9856-2014, SL16715-2014, SL17300-2014, SL2731-2015 y SL14388-2015), lo que en principio relevaría al dador de empleo del pago de las prestaciones derivadas del mencionado sistema.

No obstante, también ha admitido que **aquella solución está dirigida a las pensiones de jubilación y de vejez**, en aplicación de la Ley 100 de 1993, por tratarse de derechos en formación, **lo que no sucede en relación con las pensiones de invalidez y de sobrevivientes**, toda vez que, dijo en la sentencia (CSJ SL4698-2020), que éstas,

[...] tienen características particulares y diferentes a las que guían la prestación de vejez, pues tienen origen en una fecha incierta de causación atada a la realización efectiva del riesgo que cubren y están fundamentadas sobre otras concepciones de solidaridad, financiación y aseguramiento, diferentes de la acumulación de una cantidad suficiente de capital o de aportes, durante largos años, propias estas del riesgo de vejez (CSJ SL4698-2020).

Tampoco pasa por alto esta Sala, que a través de la sentencia SU-226 del 23 de mayo de 2019, proferida por la Corte Constitucional, se realizó el estudio del reconocimiento de una prestación de invalidez por omisión de la afiliación, con el argumento que “El incumplimiento de las obligaciones del empleador o de las entidades administradoras en materia de pensiones no es imputable ni oponible al trabajador, por lo

*cual las consecuencias negativas de estas omisiones no podrán serle adversas y nunca serán razón suficiente para enervar el acceso a una prestación pensional, pues estas dos partes (el empleador y las entidades administradoras) están llamadas a hacer uso de los instrumentos legales y administrativos dirigidos a cumplir o a exigirse mutuamente el acatamiento de sus deberes. Una actuación contraria a este presupuesto jurisprudencial sería abiertamente trasgresora del derecho a la seguridad social del titular de la pensión a que haya lugar.”*

Sin embargo, puntualiza más adelante, que, “En estos términos, el desconocimiento de la afiliación por parte del empleador desestructura indebidamente la relación triangular en materia de pensiones, porque imposibilita jurídica y materialmente la vinculación de la entidad administradora correspondiente, y con ello el ejercicio de sus facultades relacionadas con la exigibilidad de los demás deberes pensionales del contratante.<sup>8</sup> Por ello, la responsabilidad de la omisión de la afiliación recae exclusivamente en el empleador incumplido”

El anterior pronunciamiento no se opone al estado de cosas que se presenta en este caso, en punto a que se observa claramente que la Sra. GLORIA ELENA QUIROS DE SÁNCHEZ afilió a la trabajadora el 3 de noviembre de 2017, y la Administradora de pensiones solo vino a recibir los aportes correspondientes al periodo comprendido entre el 18 de julio de 2013 y el 30 de diciembre de 2013, el día 22 de noviembre de 2017, vale decir, en ambos eventos, con posterioridad a la realización del riesgo de invalidez. Estado éste que (i) se estructuró desde el 12 de diciembre de 2015, (ii) se inició el trámite de solicitud de

---

<sup>8</sup> Por ejemplo, el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 señala: “[l]os aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados para el efecto, generarán interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según sea el caso”. Por su parte, el artículo 24 del mismo cuerpo normativo dispone: “[c]orresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado prestará mérito ejecutivo”.

PCL el 18 de agosto de 2016, y (iii) la notificación de la invalidez fue recibida por la Sra. QUIROS DE SÁNCHEZ el día 25 de agosto de 2017. (Tres meses después realizaría el pago de las cotizaciones con las cuales se completaban las 50 semanas requeridas)

Ahora, se infiere que la última empleadora de la demandante fue la señora GLORIA ELENA QUIRÓS DE SÁNCHEZ, pues en el formulario de Autoliquidación de Aportes adjunto por la propia litisconsorte (pág 12 del PDF 06) aparece ella misma como tal en la casilla titulada “*Datos Generales del Empleador*”

La afiliación de nuevo al sistema pensional y el pago tardío de las cotizaciones por cuenta de la señora GLORIA ELENA QUIRÓS, puede observarse a continuación:

2013						
ARANGO DE QUIROS LUCIA 21289348						
Mes	Ingreso base de cotización	Valor cotización obligatoria	Días cotizados	Origen de la información	Estado	Aprobar
2013/01	\$589,500	\$67,899	30	PROTECCION	Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>
2013/02	\$589,500	\$67,879	30	PROTECCION	Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>
2013/03	\$589,500	\$67,857	30	PROTECCION	Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>
2013/04	\$589,500	\$67,817	30	PROTECCION	Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>
2013/05	\$589,500	\$67,840	30	PROTECCION	Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>
2013/06	\$589,500	\$67,801	30	PROTECCION	Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>
2013/07	\$334,050	\$38,457	17	PROTECCION	Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>
QUIROS DE SANCHEZ GLORIA ELENA 42962094						
Mes	Ingreso base de cotización	Valor cotización obligatoria	Días cotizados	Origen de la información	Estado	Aprobar
2013/07	\$255,450	\$76,777	13	PROTECCION	Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>
2013/08	\$589,500	\$174,992	30	PROTECCION	Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>
2013/09	\$589,500	\$172,892	30	PROTECCION	Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>
2013/10	\$589,500	\$170,492	30	PROTECCION	Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>
2013/11	\$589,500	\$168,692	30	PROTECCION	Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>
2013/12	\$589,500	\$166,134	30	PROTECCION	Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>

PLANILLA	PERIDO	FECHA	DIAS	IBC	RAZON SOCIAL
207054731	200402	20040426	29		811018712 BORDAESTAMPA S.A.
207376983	200403	20040531	30		811018712 BORDAESTAMPA S.A.
207503182	200404	20041110	30		811018712 BORDAESTAMPA S.A.
207502612	200405	20041110	30		811018712 BORDAESTAMPA S.A.
207798733	200406	20041202	30		811018712 BORDAESTAMPA S.A.
207799104	200407	20050107	30		811018712 BORDAESTAMPA S.A.
207898860	200408	20050125	24		811018712 BORDAESTAMPA S.A.
207698078	200502	20050310	13		811041190 IDEAS FACTORY LTDA
191290890	200503	20050412	30		811041190 IDEAS FACTORY LTDA
207911566	200504	20050510	15		811041190 IDEAS FACTORY LTDA
207907822	200508	20060323	15		811041190 IDEAS FACTORY LTDA
208961032	200509	20060323	30		811041190 IDEAS FACTORY LTDA
208961033	200510	20060323	30		811041190 IDEAS FACTORY LTDA
208949970	200511	20060323	30		811041190 IDEAS FACTORY LTDA
208961031	200512	20060113	15		811041190 IDEAS FACTORY LTDA
300615281	201307	20171122	13		42962094 QUIROS DE SANCHEZ GLORIA ELENA
300615282	201308	20171122	30		42962094 QUIROS DE SANCHEZ GLORIA ELENA
300615283	201309	20171122	30		42962094 QUIROS DE SANCHEZ GLORIA ELENA
300615284	201310	20171122	30		42962094 QUIROS DE SANCHEZ GLORIA ELENA
300615285	201311	20171122	30		42962094 QUIROS DE SANCHEZ GLORIA ELENA
300615286	201312	20171122	30		42962094 QUIROS DE SANCHEZ GLORIA ELENA

Por lo anterior, los pagos realizados de manera extemporánea, no satisfacen los requisitos exigidos por la normatividad señalada, y mucho menos se le puede hacer responsable a la AFP PROTECCIÓN S.A. bajo la figura del allanamiento en mora por el hecho de recibir dicha suma de dinero, pues a todas luces debió existir la afiliación por parte del empleador moroso.

Debe repetirse que lo procedente en este caso no es el pago de aportes a la seguridad social, debido a que no estamos frente a la figura de la mora del empleador, como tampoco se puede ordenar un cálculo actuarial en razón de la naturaleza de la contingencia de que se trata, por consiguiente, debe ser la empleadora GLORIA ELENA QUIRÓS DE SÁNCHEZ quien reconozca en su integridad la prestación económica, como lo ha plasmado la jurisprudencia.

En este sentido se revocará la decisión de primer grado, y en su lugar se absolverá a PROTECCIÓN S.A. de las súplicas de la demanda y se condenará a la Sra. GLORIA ELENA QUIROS DE SÁNCHEZ al reconocimiento y pago de la prestación de invalidez.

**1) Requisitos para tener derecho a la pensión de invalidez y retroactivo pensional**

Ahora bien, la Sala no encuentra reparo alguno en el hecho claro de la pérdida de capacidad laboral de la actora superior al 50%, más exactamente del 69.34%, como resultado de un "*Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico*". De igual forma, se repite, es la señora GLORIA ELENA QUIRÓS DE SÁNCHEZ quien debe asumir la carga prestacional correspondiente al no efectuar la afiliación de la demandante al sistema pensional, motivo por el cual su empleada no logró reunir las 50 semanas exigidas dentro de los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez como lo exige el artículo 1º de la ley 860 de 2003.

Así las cosas, deberá la señora QUIRÓS DE SÁNCHEZ, como empleadora omisa, reconocer el retroactivo pensional causados desde el 12 de diciembre de 2015 hasta el 31 de enero de 2023, tal y como lo liquidó la juez de primera instancia.

De igual forma, debe seguir reconociendo una mesada pensional en cuantía del salario mínimo legal mensual vigente a partir del 1º de febrero de 2023.

## **2) Intereses moratorios o indexación.**

En lo que respecta a los intereses moratorios, éstos no prosperarán, pues como reiteradamente se ha dicho, tales intereses son causados por el retardo injustificado en el pago de las mesadas pensionales una vez elevada la solicitud con el lleno de los requisitos, y en el presente caso, como a la codemandada GLORIA ELENA QUIRÓS DE SÁNCHEZ nunca se le elevó solicitud pensional, no procederán los mismos, debiendo así **ABSOLVER** de tal pretensión.

Sin embargo, como en la demanda fue solicitada subsidiariamente la indexación, es indudable que la pérdida del poder adquisitivo del peso

colombiano es un hecho notorio, pues cuando un pago no se hace en la fecha de su exigibilidad, comienza a depreciarse y la indexación o revaluación judicial es el mecanismo apropiado para combatir este defecto.

En virtud de lo anterior, se accederá al reconocimiento de la indexación de la sumas objeto de condena por concepto de retroactivo de la pensión de invalidez, atendiendo a la pérdida de poder adquisitivo de la moneda; en consecuencia, se **CONDENARÁ** a la Sra. GLORIA ELENA QUIRÓS DE SÁNCHEZ, a indexar en el momento en que proceda a realizar el real y efectivo pago del retroactivo, tomando para ello el valor del IPC certificado por el DANE, entre la causación y el momento del pago.

### **3) Costas procesales**

Basta señalar que el artículo 365 del Código General del Proceso ratificó el criterio objetivo en cuanto ordena que en los procesos y en las actuaciones posteriores en que haya controversia, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, entre otros casos.

Resulta que en este caso se absolverá a PROTECCIÓN S.A. de la condena impuesta por las razones anteriormente manifestadas, lo que implica que no puede entenderse como parte vencida en juicio, y por tal razón, no estará obligada al pago de las costas procesales, las cuales debe asumir la señora GLORIA ELENA QUIRÓS DE SÁNCHEZ en su lugar.



Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE**

**PRIMERO: REVOCA** la sentencia de primera instancia en cuando condenó a PROTECCIÓN S.A al pago de la pensión de invalidez de la demandante, para en su lugar, **CONDENAR** a la señora GLORIA ELENA QUIRÓS DE SÁNCHEZ a reconocer la pensión de invalidez a favor de la señora NORA PATRICIA HEREDIA ZAPATA, conforme se plasmó en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: CONDENA** a la señora GLORIA ELENA QUIRÓS DE SÁNCHEZ, a pagar el retroactivo pensional comprendido entre el 12 de diciembre de 2015 hasta el 31 de enero de 2023, tal y como lo liquidó la juez de primera instancia. Y a partir del mes de febrero de 2023, seguirá reconociendo y pagando a la demandante una mesada pensional, en el equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, sin perjuicio de los incrementos legales y la mesada adicional de diciembre.

**TERCERO: CONDENA** a la señora GLORIA ELENA QUIRÓS DE SÁNCHEZ a indexar el retroactivo pensional hasta el momento en que realice el pago efectivo.

**CUARTO:** Se **ABSUELVE** a PROTECCIÓN S.A. de todas las pretensiones incoadas en su contra.

**QUINTO:** Costas de la primera instancia a cargo de la señora GLORIA ELENA QUIRÓS DE SÁNCHEZ y en favor de la demandante. En esta instancia no se causaron.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b05228982f7153587b769decfd3845950edc497373540363b6c11894f2aafe14**

Documento generado en 20/10/2023 03:51:08 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**